

COMPAS

Correctional Offender Management Profiling for Alternative Sanctions (COMPAS) es un software utilizado por distintos tribunales y sistemas penitenciarios en Estados Unidos para estimar la probabilidad de que una persona acusada de un delito vuelva a cometer otros en el futuro. El sistema fue desarrollado por Northpointe Inc. (luego renombrada Equivant), una empresa privada que comercializa herramientas de apoyo para decisiones judiciales.

El uso de COMPAS se expandió desde principios de los años 2000, pero llamó la atención pública en 2016, cuando investigaciones periodísticas revelaron que el algoritmo influía directamente en decisiones judiciales como fianzas, sentencias y programas de rehabilitación. Bryan Bell y Tim Brennan, cofundadores de la compañía, actuaron como principales defensores técnicos y científicos del modelo estadístico. Funcionarios estatales, directores de servicios penitenciarios y jueces adoptaron la herramienta como apoyo objetivo para gestionar cargas judiciales y reducir decisiones discrecionales. Sin embargo, pocos actores institucionales solicitaron auditorías independientes antes de implementarla.

Uno de los factores más controvertidos fue la falta de transparencia: Equivant mantenía en reserva los criterios exactos utilizados en el algoritmo, argumentando propiedad intelectual. Esto hizo que defensores públicos, acusados y organizaciones civiles no pudieran revisar cómo se calculaban las calificaciones de riesgo asignadas a individuos específicos.

En 2016, un análisis comparativo publicado por una organización independiente puso en evidencia diferencias notablemente desproporcionadas en las calificaciones asignadas a distintos grupos de acusados, afectando de manera particular a comunidades afroamericanas. Funcionarios estatales encargados de supervisar el uso de tecnología judicial se vieron cuestionados por haber delegado decisiones críticas en un sistema opaco sin evaluar de manera suficiente sus efectos sociales.

A nivel financiero, los estados que implementaron COMPAS pagaron licencias recurrentes estimadas entre 500.000 y 1 millón de dólares anuales por jurisdicción, cifras pequeñas comparadas con presupuestos penitenciarios estatales que superan los 5.000 millones por año. Sin embargo, la repercusión pública produjo presiones políticas para suspender, auditar o reemplazar la herramienta. En algunas jurisdicciones, la contratación se redujo o se optó por modelos desarrollados internamente con mayor supervisión.

Fuentes

- ProPublica, 2016
- The New York Times, 2017
- American Civil Liberties Union (ACLU) briefs, 2017–2019
- Reportes legislativos estatales EE.UU., 2018
- Wired, 2019